

II.—Que la supra citada Ley creó la Junta Médica Calificadora de la Incapacidad para el Trabajo, como una instancia administrativa encargada de revisar los dictámenes finales emitidos por el Instituto Nacional de Seguros, que estará conformada por cinco miembros representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Salud, el Colegio de Médicos y Cirujanos, el Instituto Nacional de Seguros y los trabajadores, a través de sus organizaciones sociales. Además señala que la integración deberá hacerla el Poder Ejecutivo por medio del respectivo Decreto.

III.—Tanto la referida Ley de Riesgos del Trabajo, como el Reglamento General sobre Riesgos del Trabajo, emitido mediante Decreto Ejecutivo N° 13466-TSS del 24 de marzo de 1982, y el Decreto N° 15024 del 16 de noviembre de 1983, Reglamento de la Junta Médica Calificadora de la Incapacidad para el Trabajo, especialmente en su artículo 4, disponen que cada una de las entidades representadas debe elegir directamente a sus miembros y que el Poder Ejecutivo debe hacer lo mismo con la representación de los Trabajadores de las ternas que le sean sometidas por las federaciones de trabajadores, legalmente constituidas.

IV.—Que se encuentra vencido el periodo de nombramiento de todos los miembros de la Junta Médica Calificadora de la Incapacidad para el Trabajo. **Por tanto,**

DECRETAN:

#### Nombramiento de La Junta Médica Calificadora de la Incapacidad para el Trabajo

Artículo 1°—Designar al Doctor Guillermo Sanabria Umaña, cédula 1-1039-0802, como Representante de los Trabajadores ante la Junta Médica Calificadora de la Incapacidad para el Trabajo.

Artículo 2°—De acuerdo con el nombramiento que realizó cada representación, la Junta Médica Calificadora de la Incapacidad para el Trabajo se conforma por los siguientes representantes: Doctora Yolanda Alfaro Sánchez, cédula de identidad 4-128-629, como representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; el Doctor Roberto Castro Córdoba, cédula de identidad 1-508-642, como representante del Ministerio de Salud; al Doctor Ronny Arias Blanco, cédula de identidad 1-615-835, como representante Instituto Nacional de Seguros; el Doctor Jorge Arias Sobrado cédula de identidad 1-314-695, como el representante del Colegio de Médicos y Cirujanos y el Doctor Guillermo Sanabria Umaña, cédula 1-1039-0802, como Representante de los Trabajadores.

Artículo 3°—Rige a partir del quince de marzo del dos mil trece.

Dado en la Presidencia de la República, a los doce días del mes de marzo del dos mil trece.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Olman Segura Bonilla.—1 vez.—O. C. N° 18828.—Solicitud N° 61914.—C-44650.—(D37686-IN2013031480).

N° 37692-H

#### LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE HACIENDA

Con fundamento en las atribuciones y facultades conferidas en los incisos 3) y 18) del artículo 140 y 146 de la Constitución Política del 7 de noviembre del 1949, los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1), 28 inciso 2) acápite b), 89) y 103 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 de fecha 2 de mayo de 1978.

Considerando:

1.—Que mediante Decreto Ejecutivo número 35305 de fecha 29 de mayo de 2009, publicado en el Diario Oficial *La Gaceta* número 121 del 24 de junio del 2009, se emitió el Reglamento de Creación, Organización y Funcionamiento de la Dirección del Centro de Investigación y Formación Hacendaria del Ministerio de Hacienda.

2.—Que en el artículo 5 inciso n), asignó al Centro de Investigación y Formación Hacendaria, en la cabeza del Director y/o Subdirector, efectuar los procedimientos administrativos originados por el incumplimiento de las cláusulas establecidas en los contratos y en la normativa establecida en la materia de su competencia.

3.—Que de conformidad con el artículo 103 inciso 1) de la Ley General de Administración Pública, le asiste a este Despacho la potestad de organizar internamente el Ministerio, siempre y cuando la actividad regulada no implique el uso de facultades de imperio ante el administrado.

4.—Que en razón de lo anterior, a efectos de un mejor uso y razonabilidad de los recursos públicos resulta necesario modificar el artículo 5 inciso n) del Decreto Ejecutivo número 35305 de fecha 29 de mayo de 2009. **Por tanto,**

DECRETAN:

#### Modificación del artículo 5 inciso n) del Decreto Ejecutivo N° 35305-H “Reglamento de Creación, Organización y Funcionamiento de la Dirección del Centro de Investigación y Formación Hacendaria del Ministerio de Hacienda

Artículo 1°—Modifíquese, el artículo 5 inciso n) del Decreto Ejecutivo número 35305-H publicado en el Diario Oficial *La Gaceta* N° 121 de fecha 24 de junio del 2009 de cita, para que se lea de la siguiente forma:

“Artículo 5 (...)

- n) El Director y el Subdirector autorizarán con su firma los gastos en que incurra el sub-programa presupuestario a su cargo. Asimismo, firmarán los certificados que emita el Centro y los contratos de licencia para estudio y para capacitación. En caso de eventuales incumplimientos de las cláusulas establecidas en dichos contratos, así como de la normativa que rige la materia, el Director o el Subdirector deberán remitir al Despacho del Ministro, los informes originados a efectos de que se valore la apertura de los procedimientos administrativos y la conformación de los respectivos Órganos Directores con los abogados de la Dirección Administrativa y Financiera de este Ministerio. Dichos informes deberán contener detalladamente los hechos en que se fundamentan, los supuestos incumplimientos, así como la prueba respectiva, para lo cual deberán conformar un expediente con su respectiva foliatura.

(...)”

Artículo 2°—**Vigencia.** Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veintidós días del mes de marzo de dos mil trece.

Publíquese.—LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Hacienda, Édgar Ayales.—1 vez.—O. C. N° 17960.—Solicitud N° 14103.—C-38540.—(D37692-IN2013031537).

N° 37694-MEIC

#### LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA Y LA MINISTRA DE ECONOMÍA INDUSTRIA Y COMERCIO

En uso de las atribuciones que les confieren los artículos 11, 140, incisos 3), 8), 18) y 20); artículo 146 de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949 y sus reformas; artículos 11, 25 y 28 inciso 2, acápite b), de la Ley General de la Administración Pública, N° 6227 del 02 de mayo de 1978; la Ley Orgánica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, N° 6054 del 14 de junio de 1977; la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, N° 7472 del 20 de diciembre de 1994; la Ley de Aprobación del Acta Final en que se Incorporan los Resultados de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, N° 7475 del 20 de diciembre de 1994 y la Ley del Sistema Nacional para la Calidad, N° 8279 del 02 de mayo de 2002.

Considerando:

1°—Que el numeral 2.3 del Anexo 1A (Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio) de la Ley N° 7475 de Aprobación del Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, establece que los reglamentos técnicos no se mantendrán si las circunstancias u objetivos que dieron lugar a su adopción ya no existen, asimismo, recomienda que los reglamentos técnicos pueden atenderse de una manera menos restrictiva al comercio.

2°—Que el artículo 39 de la Ley N° 8279 del Sistema Nacional para la Calidad, crea el Órgano de Reglamentación Técnica, como Comisión Interministerial con la misión de contribuir a la elaboración de reglamentos técnicos. Asimismo, el artículo 40 de la misma Ley en su inciso a) faculta al Órgano de Reglamentación Técnica a recomendar la adopción, actualización o derogación de los reglamentos técnicos emitidos por el Poder Ejecutivo.

3°—Que las buenas prácticas reglamentarias obligan a los gobiernos a la revisión de los reglamentos técnicos existentes a fin de que se ajusten a las condiciones y las necesidades imperantes de la economía, procurando así un equilibrio necesario, de manera que dicha reglamentación no sea omisa ni excesiva y no propicie un obstáculo al desarrollo económico.

4°—Que el desarrollo y los cambios que ha venido experimentado el comercio internacional, ha generado la inaplicabilidad en el uso de algunos reglamentos técnicos, por lo que es necesaria su derogación expresa. **Por tanto,**

DECRETAN:

### **Derogatoria del Decreto Ejecutivo N° 18657-MEC, Norma Oficial de Nomenclatura de Frutos y Productos Hortícolas**

Artículo 1°—**Derogatoria.** Deróguese el Decreto Ejecutivo N° 18657-MEC, Norma Oficial de Nomenclatura de Frutos y Productos Agrícolas del 24 de noviembre de 1988, publicado en *La Gaceta* N° 3 del 04 de enero de 1989.

Artículo 2°—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los diecisiete días del mes de abril del dos mil trece.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—La Ministra de Economía, Industria y Comercio, Mayi Antillón Guerrero.—1 vez.—O. C. N° 19029.—Solicitud N° 111210.—C-27260.—(D37694-IN2013031518).

N° 37695-MP-MTSS

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA,  
EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA  
Y EL MINISTRO DE TRABAJO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

Con fundamento en los artículos 140, incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política, los artículos 25.1) y 27.1) de la Ley General de la Administración Pública (N° 6227 de 2 de mayo de 1978), 3.c) y 19 de la Ley de Planificación Nacional (N° 5525 de 2 de mayo de 1974) y en la Ley de Protección al Ciudadano de Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos (N° 8220 de 4 de marzo del 2002).

*Considerando:*

I.—Que en Costa Rica se reguló por primera vez el Teletrabajo en el Sector Público en el año 2008 mediante el Decreto N° 34704-MP-MTSS, el cual introdujo esta modalidad de trabajo como un plan piloto del Gobierno.

II.—Después de cuatro años de haberse implementado exitosamente el Teletrabajo en algunas Instituciones Públicas, se hace necesario actualizar la normativa reglamentaria que regula esta forma de trabajo.

III.—En el Congreso Internacional “TELEWORK 2012” celebrado en Costa Rica en agosto del 2012, se redactó el documento denominado “Declaración de San José: “La Modernización del Estado: El Teletrabajo en la Sociedad del Conocimiento” dentro del cual se plasmó la recomendación de los participantes, de emitir un nuevo Decreto para el sector público junto con nueva normativa general que regule el Teletrabajo.

IV.—Que la Ley N° 8279 del 02 de mayo del 2002, mediante la cual se promueve y regula el Sistema Nacional para la Calidad, contempla entre sus objetivos principales, el orientar, ordenar y articular la participación de la Administración Pública y el sector privado en las actividades de evaluación de la conformidad y de promoción de la calidad, lo cual ha generado dentro del sector público costarricense una cultura de mejoramiento continuo en la prestación de servicios, en la búsqueda no sólo de un reconocimiento en el ámbito nacional e internacional, sino además de la eficiencia y eficacia de tales servicios, demostrables a través de índices de productividad en la consecución de resultados.

V.—Que el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 “María Teresa Obregón Zamora”, establece cuatro pilares fundamentales o ejes de gestión, que servirán de marco orientador en el quehacer del Gobierno de la República, a saber: Bienestar Social, Seguridad Ciudadana y Paz Social, Ambiente y Ordenamiento Territorial

y Competitividad e Innovación. Dentro de esta propuesta de gestión pública, se identifican metas programáticas por sectores de actividad, como acciones transversales la promoción y el mejoramiento del capital humano y los procesos de trabajo, por medio de la utilización de herramientas tecnológicas, a fin de lograr una sociedad más solidaria e inclusiva, y un país con índices de productividad crecientes.

VI.—Que la Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos, N° 8488, indica que la política de gestión del riesgo nacional debe de ejecutarse en forma transversal incluyendo las Instituciones del Estado Costarricense; para lo cual debe articular los instrumentos, los programas y los recursos públicos en acciones ordinarias y extraordinarias, institucionales y sectoriales, orientadas a evitar la ocurrencia de los desastres y la atención de las emergencias en todas sus fases, para lo cual el Teletrabajo y las Videocomunicaciones se convierten en medios para mantener la continuidad de los servicios públicos.

VII.—Que el teletrabajo es una modalidad de organización de la prestación laboral, basada en el uso óptimo de las tecnologías de la información y comunicaciones, donde el teletrabajo se ha beneficiado por la evolución del concepto de las Comunicaciones Unificadas, que implica la integración de aplicaciones de Telefonía Digital, aplicaciones de Colaboración y Sistemas de Videocomunicaciones, que brindan las herramientas facilitadoras en los procesos de interacción de las personas en las diferentes modalidades de teletrabajo.

VIII.—Que a partir de la promulgación del Decreto Ejecutivo N° 34704-MP-MTSS, se inició la promoción, sensibilización e implementación de programas piloto de Teletrabajo en las instituciones del sector público cuyos resultados han sido de una valoración altamente positiva, tanto para la institución como para los servidores participantes en dichos planes y los responsables de las unidades en las que éstos laboran, hace que resulte conveniente, no sólo hacer extensivo, sino fortalecer el programa de Teletrabajo a nivel del sector público costarricense.

IX.—Que la transformación y modernización del Estado, impone la necesidad de combinar la tecnología con esquemas más eficientes de trabajo, que aprovechen al máximo los recursos y mejoren la productividad y calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos, de forma tal que se contribuya adicionalmente con la reducción significativa del gasto público.

X.—Que la implementación del Teletrabajo como organización innovadora del trabajo, aumenta la posibilidad de inclusión en la esfera laboral del sector público, de personas con alguna condición especial de discapacidad, mujeres jefes de familia, adultos mayores activos laboralmente, entre otros, los cuales por alguna razón no pueden estar lejos de sus lugares de domicilio por tiempo prolongado. **Por tanto,**

DECRETAN:

### **PROMOCION DEL TELETRABAJO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS**

Artículo 1°—**Objeto:** El presente Decreto tiene por objeto promover y regular el Teletrabajo en las Instituciones del Estado, como instrumento para promover la modernización de las organizaciones, la inserción laboral, reducir el gasto en las Instituciones Públicas, incrementar la productividad del funcionario, el ahorro de combustibles, la protección del medio ambiente, y favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, mediante la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC's).

Artículo 2°—**Definiciones:**

1. **Modernización de la Gestión:** Comprende entre otras, la incorporación del teletrabajo y las videocomunicaciones dentro de la estrategia institucional, así como el uso óptimo de la tecnología para simplificar trámites, reducir el consumo de papel y brindar servicios en tiempo real; además de la actualización de la normativa y el cambio de cultura organizacional hacia el uso óptimo e intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación.
2. **Institución participante:** Institución del sector público, que cumpla con las condiciones y requerimientos necesarios para la implementación del teletrabajo, mediante la observación de los lineamientos y políticas determinadas por la Comisión Interinstitucional de Teletrabajo.